LA REFORMA CONTABLE Y EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE INTERNACIONAL

El proceso de **armonización contable internacional** se puso en marcha hace tiempo, debido a la necesidad de que las entidades que cotizan en los mercados de valores faciliten una información financiera **realmente comparable**, con independencia de dónde radique la sede de cada entidad. Si las compañías elaboran su información según la legislación vigente en su propio país, y la normativa de los diferentes países utiliza criterios distintos, la información suministrada por las entidades no es realmente comparable.

En este sentido, la **Unión Europea**, mediante el *Reglamento CE/1606/2002*, decidió adoptar y aplicar en la Comunidad las “**Normas Internacionales de Contabilidad**”, que incluyen tanto las Normas Internacionales de Contabilidad en sentido estricto (NIC) como las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), así como las interpretaciones de las mismas que emita el organismo competente.

En España, con objeto de adaptar nuestra normativa mercantil contable a los criterios adoptados por la Unión Europea, se está tramitando en el Congreso de los Diputados el “*Proyecto de Ley de reforma y adaptación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea*”.

Aunque en un principio el proceso de armonización iba dirigido a los **grupos consolidados que cotizan** en mercados organizados, el Proyecto de Ley incorpora una serie de medidas aplicables a **todo tipo de empresas**, si bien estas medidas tampoco van a suponer un cambio esencial en el día a día de la contabilidad de la gran mayoría de las empresas españolas, PYMES que presentan balances abreviados.

En cuanto a la **entrada en vigor** de esta reforma, aunque estaba prevista para el 1 de enero de 2007, lo cierto es que continúa su tramitación parlamentaria, habiéndose presentado numerosas enmiendas al texto del Proyecto, dos de ellas a la totalidad, y siendo uno de los aspectos más debatidos su precipitada entrada en vigor, por lo que ésta muy previsiblemente **se pospondrá**, al menos, hasta el 1 de enero de 2008.

1. El proceso de armonización contable internacional. Las Normas Internacionales de Contabilidad

La globalización incide también en los mercados financieros, de modo que las entidades cada vez operan más en los mercados internacionales y los usuarios de la **información financiera** como inversores, analistas y responsables de gestión necesitan, para poder adoptar decisiones adecuadas, que dicha información **sea comparable**, independientemente de dónde radiquen las sedes de las entidades.

Sin embargo, para las compañías europeas resulta muy costoso suministrar la información de manera que puedan compararse directamente sus resultados con los de las entidades de otros países ya que, por un lado, tienen que elaborar esa información de acuerdo con su normativa nacional y por otro, al utilizar las normativas internas de los

países diferentes criterios, tendrían que adaptarla o traducirla para que fuera comparable internacionalmente.

Todo esto impulsa la decisión, por parte de la Unión Europea, de adoptar y aplicar, en el ámbito comunitario, las **Normas Internacionales de Contabilidad**, normas contables globales de elevada calidad, emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (actualmente Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad o más conocido como **IASB**), con objeto de mejorar la transparencia y comparación de la información financiera que se facilita a los inversores en los mercados internacionales. Dicha decisión se adopta mediante la aprobación del *Reglamento CE/1606/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad.*

Las NIC. Obligatoriedad de su aplicación

El artículo 2 del Reglamento CE/1606/2002 define las “**Normas Internacionales de Contabilidad**” como el conjunto de:

- las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)
- las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
- las interpretaciones correspondientes que realice de las anteriores el organismo competente (interpretaciones del SIC / interpretaciones del IFRIC)
- las modificaciones ulteriores de dichas normas y de sus interpretaciones, así como las futuras normas y las interpretaciones correspondientes que pueda elaborar o aprobar el IASB.

En cuanto a **su aplicación**, el Reglamento establece:

a) La obligación de que, para los ejercicios financieros que comiencen **a partir del 1 de enero de 2005** inclusive, las sociedades que se rigen por la Ley de un Estado miembro elaboren sus **cuentas consolidadas** de conformidad con las normas internacionales de contabilidad si, en la fecha de cierre de su balance, sus valores han sido **admitidos a cotización** en un mercado regulado de cualquier Estado miembro (Artículo 4).

b) La opción a cada Estado miembro de **permitir o exigir** que las entidades distintas de las anteriores elaboren sus cuentas consolidadas, sus cuentas anuales individuales o ambas, según las NIC. Esta opción incluye, por lo tanto, los siguientes supuestos:

- que las entidades **con cotización oficial** elaboren sus cuentas anuales **individuales** de conformidad con las NIC /NIIF
- que las entidades **sin cotización oficial** elaboren sus estados financieros individuales, consolidados o ambos con arreglo a las NIC/NIIF.

Por lo tanto, la Unión Europea, únicamente obliga a aplicar las NIC/NIIF respecto de las **cuentas consolidadas** de las entidades **que cotizan** en algún mercado oficial de cualquier Estado miembro. Para los demás supuestos, establece la opción de cada Estado miembro de exigir o no su aplicación.

Además el Reglamento, en su artículo 9, establece **la posibilidad** de que los Estados miembros **retrasen** la obligación de presentar las cuentas consolidadas conforme a las NIC hasta el **1 de enero de 2007** para las sociedades que cumplan alguno de los siguientes **requisitos**:

- que sus bonos y obligaciones sean los únicos valores admitidos en un mercado regulado de cualquier Estado miembro.
- que sus valores estén admitidos a cotización oficial en un país que no sea miembro de la Comunidad y que para ello hayan venido utilizando normas internacionalmente aceptadas a partir de un ejercicio financiero iniciado antes de la publicación del Reglamento en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (el 11-09-2002).

2. La reforma contable en España

2.1. Antecedentes

En el año 2001 se constituyó una **Comisión de expertos** para analizar la situación de la Contabilidad en nuestro país y definir las líneas básicas para, en su caso, abordar su reforma. Esta comisión elaboró el llamado "*Libro Blanco para la reforma de la contabilidad en España*" que, en sus conclusiones, tiene en cuenta la **estrategia contable de la Unión Europea** (publicada el 13-6-2000 en una comunicación de la Comisión titulada "*La estrategia de la Unión Europea en materia de información financiera: El camino a seguir*") y la adopción, por parte de la misma, de las Normas Internacionales de Contabilidad.

Las principales **conclusiones y recomendaciones** de la Comisión se pueden resumir, en:

- a)** La revisión de la normativa contable española debe llevarse a cabo teniendo como referente las **normas del IASB**, aplicando sus principios generales e iniciando un proceso gradual y continuo de reforma del Derecho contable.
- b)** En cuanto a las **cuentas consolidadas**, los grupos que **cotizan** deben aplicar las NIC/NIIF por mandato del artículo 4 del Reglamento CE/1606/2002.

Respecto de los que **no cotizan**, la Comisión recomienda que apliquen los criterios de valoración de las NIC/NIIF. Esto podría hacerse aplicando directamente las NIC o, considerando que la normativa interna española va a adaptarse a las mismas, estos grupos podrían aplicar en la elaboración de sus cuentas consolidadas la normativa española adaptada a esos criterios de valoración.

Esto supondría un tratamiento diferente en cuanto a la normativa aplicable a las cuentas consolidadas de los grupos de sociedades que cotizan (aplican las NIC) y los que no cotizan (aplican la normativa interna), pero daría un tratamiento homogéneo a las cuentas consolidadas e individuales de los grupos no cotizados, lo que puede mejorar la comparabilidad entre los mismos.

c) Respecto de las **cuentas individuales**, la Comisión recomienda:

- Que **todas las empresas españolas** apliquen exclusivamente la **normativa contable española** en su elaboración, que debería contener criterios de valoración y presentación compatibles con las NIC/NIIF. Entiende la Comisión que no procede recomendar una aplicación directa de las NIC porque aunque esto daría un tratamiento homogéneo a todo tipo de sujetos contables españoles, se derivarían muchos inconvenientes en la aplicación de las mismas.

- En la **adaptación** de la normativa contable nacional a la emitida por el IASB, recomienda guiarse siempre por las opciones que reflejen mejor la imagen fiel, y establecer criterios más simplificados, aunque con similares efectos, en los tratamientos contables más complejos recogidos en las NIC/NIIF.

- Recomienda **mantener el Plan General de Contabilidad** tal y como está concebido en la actualidad, adaptándolo a los **criterios de valoración** del IASB, así como las adaptaciones sectoriales del mismo.

En este contexto, con objeto de que la normativa contable española se adapte a la estrategia adoptada por la UE en esta materia, consistente en aceptar las Normas Internacionales de Contabilidad, se persigue abordar una **reforma contable**, basada en la modificación de las normas vigentes que estén en conflicto con las normas del IASB y en la incorporación de normas de este Organismo que no tienen referente normativo en España, para adecuar nuestra legislación a los criterios europeos.

2.2. Iniciativas adoptadas

2.2.1. Medidas introducidas por la Ley 62/2003

La *Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social*, en su **Disposición final undécima**, **incorpora** a nuestro Derecho Mercantil Contable las Normas Internacionales de Contabilidad adoptadas por la Unión Europea, a los exclusivos efectos de las **cuentas anuales consolidadas**.

En concreto, establece lo siguiente:

a) Para los ejercicios que comiencen a partir del **1 de enero de 2005**, es **obligatorio** formular las cuentas anuales **consolidadas** de acuerdo con las NIC/NIIF aprobadas por los Reglamentos de la Comisión Europea si, a la fecha de cierre del ejercicio, alguna de las sociedades del grupo ha emitido valores **admitidos a cotización** en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

Si, a la fecha de cierre del ejercicio, ninguna de las entidades del grupo ha emitido valores admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, **pueden optar** por aplicar las normas de contabilidad del Código de Comercio y las de desarrollo, o por las NIC/NIIF aprobadas por los Reglamentos de la Comisión Europea. Si optan por estas últimas, las cuentas anuales consolidadas deben elaborarse de manera continuada de acuerdo con las mismas.

Esto también es aplicable a los casos en que, voluntariamente, cualquier persona física o jurídica dominante formule y publique cuentas consolidadas.

b) Para las entidades (excepto las de crédito) obligadas a formular **cuentas consolidadas**, que a la fecha de cierre del ejercicio únicamente hubieran emitido valores de renta fija admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, se establecía la posibilidad de seguir aplicando las normas del Código de Comercio hasta los ejercicios que comiencen a partir de **1 de enero de 2007**, salvo que hubiesen aplicado en un ejercicio anterior las NIC/NIIF.

Junto con estas medidas, la Ley 62/2003, en sus **Artículos 106 y 107** modifica el **Código de Comercio** (C. Com.) y el texto refundido de la **Ley de Sociedades Anónimas** (TRLSA), con objeto de adecuar la normativa interna al Reglamento CE 1606/2002, y en transposición de la Directiva 2001/65/CE, en materia de normas de valoración aplicables en las cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedad, así como de los bancos y otras entidades financieras.

2.2.2. El Proyecto de Ley de reforma contable

El Proyecto de Ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional, con base en la normativa de la Unión Europea fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de 12 de mayo de 2006.

Actualmente su tramitación parlamentaria continúa, estando pendiente la aprobación del texto por la Comisión Legislativa del Ministerio de Economía y Hacienda tras la presentación del correspondiente informe de la Ponencia, y su posterior remisión al Senado. Su entrada en vigor, inicialmente prevista para el 1 de enero de 2007 muy previsiblemente se pospondrá, al menos, hasta el 1 de enero de 2008.

En el marco de la armonización contable internacional y más en concreto, de la adopción de las NIC por la Comunidad Europea, este Proyecto de Ley persigue una reforma de la normativa mercantil en materia contable que adapte la misma a los criterios incluidos en los Reglamentos de la Unión Europea con carácter obligatorio.

Si bien este proceso de adaptación se dirige, principalmente, a los grupos consolidados que cotizan en mercados de valores organizados, se considera necesario que la normativa nacional dote de una cierta homogeneidad a la información contable suministrada por los diferentes sujetos, por lo que el Proyecto de Ley da nueva redacción e incorpora preceptos al Código de Comercio y al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cuyos efectos se extienden **a todo tipo de empresas**.

Análisis del contenido del Proyecto de Ley

El contenido del Proyecto de Ley puede dividirse, para su análisis, en cuatro grupos de medidas diferenciadas:

A. Medidas sobre la elaboración de las cuentas anuales

- B. Medidas sobre los principios contables
- C. Medidas en materia de grupos de empresas y cuentas consolidadas
- D. Otras medidas adoptadas

A. Medidas sobre la elaboración de las cuentas anuales. Los nuevos documentos contables

El artículo Primero del Proyecto de Ley da nueva redacción a la Sección segunda «De las cuentas anuales», del Título III del Libro primero del Código de Comercio, artículos 34 a 41, en los que:

- Se delimita la estructura básica del **modelo contable**, recogiendo los **nuevos documentos** que junto al balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, componen un conjunto completo de estados financieros de acuerdo con los pronunciamientos internacionales.
- Se incorporan **las definiciones** de los elementos integrantes de las cuentas anuales (activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos) y se regulan las normas básicas de aplicación general sobre **la elaboración** de las mismas.
- Se establece la obligatoriedad de estas normas para **cualquier persona** física o jurídica que formule y publique cuentas anuales, aunque no esté obligada a ello.

En la nueva redacción del Código de Comercio queda recogida la regulación contable básica relativa a la elaboración de las cuentas anuales, mientras que las obligaciones sobre su formulación, auditoría, aprobación, depósito y publicación, quedan recogidas en la legislación específica de cada forma jurídica societaria.

A.1. Los nuevos documentos contables

(Artículo 34.1. C. Com. en su redacción por el artículo Primero del Proyecto de Ley)

Al cierre del ejercicio, el empresario deberá formular las cuentas anuales de su empresa, que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria. Estos documentos forman una unidad. El estado de flujos de efectivo no será obligatorio cuando así lo establezca una disposición legal.

Por lo tanto, los nuevos documentos que componen las cuentas anuales, son:

- un estado que recoja los cambios en el patrimonio neto (ECPN);
- un estado de flujos de efectivo (EFE).

a) El estado de cambios en el patrimonio neto (ECPN)

(Artículo 35.3. C. Com. en su redacción por el artículo Primero del Proyecto de Ley)

Este documento debe comprender la siguiente información:

- el resultado del ejercicio;
- las variaciones por los cambios en criterios contables;

- las correcciones de errores;
- otros ajustes y variaciones de valor, incluidos los derivados del criterio del valor razonable, que deban imputarse al patrimonio neto.

Además, el Proyecto de Ley establece la posibilidad de formular un estado de cambios en el patrimonio neto abreviado, cuando concurren las mismas circunstancias que las establecidas para formular balance abreviado (Artículo 175.1. TRLSA en su redacción por el artículo Segundo del Proyecto de Ley).

b) El estado de flujos de efectivo (EFE)

(Artículo 35.4. C. Com. en su redacción por el artículo Primero del Proyecto de Ley)

El estado de flujos de efectivo es un documento que pondrá de manifiesto, debidamente ordenados y agrupados por categorías o tipos de actividades, **los cobros y los pagos** realizados por la empresa, con el fin de informar acerca de los movimientos de efectivo producidos en el ejercicio.

Este documento **sólo tendrán obligación** de formularlo las empresas que no puedan formular balance, ECPN y memoria abreviados (Artículos 172.1. y 175.4. TRLSA en su redacción por el artículo Segundo del Proyecto de Ley).

Como medida directamente relacionada con ésta, se suprime el cuadro de financiación que forma parte de la memoria. (Artículo 200 TRLSA en su redacción por el artículo Segundo del Proyecto de Ley).

A.2. Normas básicas sobre la elaboración de las cuentas anuales. Definiciones

(Artículos 35 y 36 C. Com. en su redacción por el artículo Primero del Proyecto de Ley)

El Proyecto de Ley incorpora al Código de Comercio, para su aplicación a todo tipo de sujetos contables, una serie de **preceptos básicos** sobre la elaboración de las cuentas anuales, la estructura y contenido elemental de los balances y las definiciones de los conceptos que los integran. Para ello, da nueva redacción a los artículos 34 a 37 de dicho cuerpo legal.

Como medida correlativa, deroga las Secciones Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas que regulan esos extremos, los esquemas y elementos de los balances y las reglas de valoración.

Se suprime, por lo tanto, la regulación legal de los **esquemas de los balances** y de las partidas en que éstos se desglosan, considerando que dichos aspectos deberán ser regulados por normas de carácter reglamentario.

Por otra parte, introduce una modificación en relación con la **información comparativa** del ejercicio anterior a incorporar en las cuentas anuales:

En cada una de las partidas de las cuentas anuales deberán figurar, además de las cifras del ejercicio que se cierra, las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior y, cuando sea significativo para ofrecer la imagen fiel de la empresa, se ofrecerán también **datos cualitativos** relativos a la situación del ejercicio anterior.

a) El balance

(Artículo 35.1. C. Com. en su redacción por el artículo primero del Proyecto de Ley)

En cuanto a **la adscripción** de los elementos patrimoniales del activo y del pasivo a las diferentes partidas del balance, se mantiene el criterio previsto en el artículo 184 del TRLSA (que queda sin contenido tras la reforma) basado en la diferencia entre circulante y no circulante, con la novedad de que se cambia la denominación por “corriente” y “no corriente”.

La nueva redacción que el Proyecto de Ley da al artículo 35.1. del Código de Comercio distingue, entre:

- Activo fijo o no corriente / Activo circulante o corriente:

El activo circulante o corriente comprenderá los elementos del patrimonio que se espera vender, consumir o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación, así como, con carácter general, aquellas partidas cuyo vencimiento, enajenación o realización, se espera que se produzca en un plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio.

Los demás elementos del activo deben clasificarse como fijos o no corrientes.

- Pasivo no corriente / Pasivo circulante o corriente:

En el pasivo se deberán diferenciar, con la debida separación, el pasivo no corriente y el pasivo circulante o corriente. El pasivo circulante o corriente comprenderá, con carácter general, las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzca en el plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio.

Los demás elementos del pasivo deben clasificarse como no corrientes.

Figurarán de forma separada las provisiones u obligaciones en las que exista incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.

- Patrimonio neto / fondos propios:

La novedad radica en la distinción entre fondos propios y patrimonio neto, términos que ahora se utilizan indistintamente y significan lo mismo (el activo real menos el pasivo exigible).

La reforma establece que en el patrimonio neto se diferenciarán, al menos, los fondos propios de las restantes partidas que lo integran.

Esto es así porque hay determinados ingresos y gastos, como los derivados de la corrección de errores, cambios de criterio y determinados ajustes por la utilización del criterio de valor razonable, que no se integran en la cuenta de pérdidas y ganancias, sino que pasan directamente al patrimonio neto.

Respecto al **balance abreviado**, se da nueva redacción al Artículo 175.1. del TRLSA, actualizando los límites para su formulación, al establecer que podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

- a) Que el total de las partidas del activo no supere los 3.080.000 euros.
- b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 6.160.000 euros.
- c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.

Las sociedades pierden esta facultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias enumeradas.

b) La cuenta de pérdidas y ganancias

La cuenta de pérdidas y ganancias continúa siendo el documento que, con carácter general, recoge los ingresos y gastos del ejercicio y, por diferencia entre ellos, **el resultado** del mismo. Debe distinguir los resultados de la **actividad ordinaria**, de los que no lo son y en él deben figurar, de forma separada, al menos los siguientes datos:

- el importe de la cifra de negocios*;
- los consumos de existencias;
- los gastos de personal;
- las dotaciones a la amortización;
- las correcciones valorativas;
- las variaciones de valor derivadas de la aplicación del criterio del valor razonable;
- los ingresos y gastos financieros;
- las pérdidas y ganancias originadas en la enajenación de activos fijos;
- el gasto por el Impuesto sobre Sociedades.

La principal novedad que en este aspecto introduce el Proyecto de Ley consiste en que hay ingresos y gastos que no se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, sino directamente al patrimonio neto.

Por ello se crea, en el nuevo modelo contable, **el estado de cambios en el patrimonio neto**, que comprende el resultado del ejercicio (saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias) y las variaciones por los cambios en criterios contables, las correcciones de errores, y otros ajustes y variaciones de valor, incluidos los derivados del criterio del valor razonable que deban imputarse directamente al patrimonio neto.

Respecto a la cuenta de pérdidas y ganancias **abreviada** se da nueva redacción al Artículo 176 del TRLSA, actualizando los límites para su formulación, de modo que podrán formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

* El importe de la cifra de negocios comprende los importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas así como el IVA y otros impuestos directamente relacionados con la mencionada cifra de negocios, que deban ser objeto de repercusión.

- a) Que el total de las partidas de activo no supere los 12.320.000 euros.
- b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 24.640.000 euros.
- c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 250.

Las sociedades perderán la facultad de formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias enumeradas.

c) La memoria

Se mantiene su regulación en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, dando el Proyecto de Ley nueva redacción al Artículo 200, que establece su contenido.

Los aspectos más destacables de la reforma en relación con este documento, son los siguientes:

- Se establece la obligación de informar en la memoria de la denominación, domicilio y forma jurídica de las sociedades en las que la sociedad posea, directa o indirectamente, un porcentaje no inferior al **5% de su capital** o en las que sin llegar a dicho porcentaje disponga, por otros medios, de una **influencia significativa**. Se tiene que indicar la participación y el porcentaje de derechos de voto, así como el importe del patrimonio neto del último ejercicio cuyas cuentas hubieran sido aprobadas. Actualmente esta obligación se establece respecto de la participación del 3% del capital para aquellas sociedades que tengan valores admitidos a cotización en mercado secundario oficial y del 20% para el resto.
- Se tiene que indicar **la naturaleza y el propósito de negocio** de los acuerdos de la empresa que no figuren en el balance así como su impacto financiero, siempre que esta información sea significativa y necesaria para la determinación de la situación financiera de la empresa.
- También habrá que informar sobre las transacciones significativas entre la empresa y **terceros vinculados** con ella, indicando la naturaleza de la vinculación, el importe y cualquier otra información acerca de las transacciones, que sea necesaria para la determinación de la situación financiera de la empresa.
- Se elimina la inclusión en este documento del **cuadro de financiación**.
- No se exige consignar la diferencia que se pudiera producir entre el cálculo del resultado contable del ejercicio y el que resultaría de haber efectuado una valoración de las partidas **con criterios fiscales**, por no coincidir éstos con los principios contables de obligatoria aplicación. Tampoco habrá que informar en la memoria sobre la diferencia entre **la carga fiscal** imputada al ejercicio y a los ejercicios anteriores, y la carga fiscal ya pagada o que habrá de pagarse por esos ejercicios.
- **Se suprime** la referencia a los movimientos de las diversas partidas del activo inmovilizado, así como de la de gastos de establecimiento.

- La información sobre el importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por los miembros del órgano de administración, cualquiera que sea su causa, **se extiende** a los mismos conceptos devengados por **el personal de alta dirección**. La misma extensión se realiza respecto del importe de los anticipos y créditos concedidos.

d) Definiciones

(Artículo 36 C. Com. en su redacción por el artículo Primero del Proyecto de Ley)

El Proyecto de Ley da nueva redacción al Artículo 36 del Código de Comercio, en el que se definen los distintos elementos de los estados financieros.

Elementos del balance:

- **Activos:** Bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que es probable que la empresa obtenga beneficios económicos en el futuro.

- **Pasivos:** Obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya extinción es probable que dé lugar a una disminución de recursos que pueda producir beneficios económicos. A estos efectos, se entienden incluidas las provisiones.

- **Patrimonio neto:** Constituye la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o propietarios, que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten.

Elementos de la cuenta de pérdidas y ganancias y del ECPN del ejercicio:

- **Ingresos:** Incrementos en el patrimonio neto, ya sea en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución de los pasivos, siempre que no tengan su origen en aportaciones de los socios o propietarios.

- **Gastos:** Decrementos en el patrimonio neto, ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de reconocimiento o aumento de los pasivos, siempre que no tengan su origen en distribuciones a los socios o propietarios.

B. Medidas sobre los principios contables y normas de valoración

(Artículo 38 C. Com. en su redacción por el artículo Primero del Proyecto de Ley)

La contabilidad de la empresa debe desarrollarse aplicando una serie de principios contables (recogidos en la Primera Parte del Plan General de Contabilidad) cuyo objeto es que las cuentas anuales, formuladas con claridad, expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

Junto con ellos, la Quinta Parte del Plan General Contable regula una serie de normas de valoración, de aplicación obligatoria, que desarrollan los principios contables anteriores.

Actualmente esta materia está recogida en el artículo 38 del Código de Comercio y en la Sección Quinta (artículos 193 a 198) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Sin embargo, el Proyecto de Ley deroga esa parte del TRLSA, dejando la regulación de rango legal de los principios contables y las normas de valoración en el artículo 38 del Código de Comercio, al que da nueva redacción, e incorpora al mismo el artículo 38 bis. Serán normas de rango reglamentario las que desarrollen con detalle estos preceptos.

Las **principales novedades** que introduce la reforma en esta materia pueden resumirse en las siguientes:

a) El principio de prudencia ya no prevalece sobre los demás principios contables. (Artículo 38 c) C. Com. en su redacción por el artículo Primero del Proyecto de Ley)

Se elimina de la redacción del artículo que este principio, *“en caso de conflicto, prevalecerá sobre cualquier otro”*.

El principio de prudencia valorativa obliga a contabilizar sólo los **beneficios obtenidos** hasta la fecha de cierre del ejercicio, pero a tener en cuenta **todos los riesgos** con origen en el ejercicio o en otro anterior, incluso si sólo se conocieran entre la fecha de cierre del balance y la fecha en que éste se formule, en cuyo caso se dará cumplida información en la memoria, sin perjuicio del reflejo que puedan originar en los otros documentos integrantes de las cuentas anuales. Deben tenerse en cuenta las amortizaciones y correcciones de valor por deterioro en el valor de los activos, tanto si el ejercicio se salda con beneficio como con pérdida.

Se elimina de la redacción las referencias a las pérdidas eventuales y su distinción entre realizadas o irreversibles y potenciales o reversibles.

Asimismo, se extiende la aplicación del principio de prudencia a las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de **incertidumbre**.

b) Se completa la redacción del principio de no compensación de partidas en el Código de Comercio. (Artículo 38 e) C. Com. en su redacción por el artículo Primero del Proyecto de Ley)

Además de completarse la redacción de este principio, estableciendo que no pueden compensarse las partidas del activo y del pasivo ni las de gastos e ingresos, se establece la posibilidad de que una norma reglamentaria establezca excepciones a su aplicación.

c) Se amplía el principio de valoración por el precio de adquisición a los pasivos. (Artículo 38 f) C. Com. en su redacción por el artículo Primero del Proyecto de Ley)

En este sentido, se establece lo siguiente:

- Los activos se contabilizarán por el precio de adquisición o por el coste de producción.
- Los pasivos por el valor de la contrapartida recibida a cambio de incurrir en la deuda, más los intereses devengados pendientes de pago.

- Las provisiones se contabilizarán por el valor actual de la mejor estimación del importe necesario para hacer frente a la obligación.

d) El principio de registro se incorpora al Código de Comercio.

(Artículo 38 g) C. Com. en su redacción por el artículo Primero del Proyecto de Ley)

Este principio, recogido en el Plan General Contable, se incorpora al artículo 38 del Código de Comercio, estableciendo que habrá que contabilizar los elementos cuando su valoración pueda ser efectuada con un adecuado grado de fiabilidad.

Según esto, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 36 C.Com., los bienes, derechos y recursos de los que es probable que la empresa obtenga beneficios económicos en el futuro (activos), deberán contabilizarse cuando su valoración sea fiable, y lo mismo respecto de las obligaciones cuya extinción es probable que dé lugar a una disminución de recursos que puedan producir beneficios económicos (pasivos).

e) Se introduce el principio de utilización de la moneda funcional

(Artículo 38 h) C. Com. en su redacción por el artículo Primero del Proyecto de Ley)

Según este principio, los elementos que integran las cuentas anuales se valorarán en la moneda del entorno económico de la empresa (la denominada “moneda funcional”). Sin embargo, la formulación y depósito de las cuentas anuales deberá seguir realizándose en euros.

f) Se introduce en el Código de Comercio el principio de importancia relativa, sin condicionarlo a valoraciones cuantitativas.

(Artículo 38 i) C. Com. en su redacción por el artículo Primero del Proyecto de Ley)

Se admitirá la no aplicación estricta de algunos principios contables cuando la importancia relativa de la variación que tal hecho produzca sea escasamente significativa y, en consecuencia, no altere la expresión de la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

Esta redacción dada por el Proyecto de Ley no exige que la variación producida por la no aplicación de los principios no sea significativa “*en términos cuantitativos*”, como establece actualmente el Plan General de Contabilidad.

g) Se incorpora con carácter general el principio de valoración por el valor razonable.

(Artículo 38 bis. C. Com. en su redacción por el artículo Primero del Proyecto de Ley)

Al margen de la nueva redacción de los principios contables, uno de los aspectos fundamentales de la reforma consiste en incorporar en el Código de Comercio con carácter general, y junto a la regla valorativa del precio de adquisición, el otro criterio de valoración que contemplan las normas internacionales adoptadas: El criterio del valor razonable.

Este principio, que el Proyecto de Ley introduce en el Código de Comercio con un alcance general, es decir, tanto para cuentas anuales individuales como consolidadas, ya estaba vigente para las cuentas consolidadas (Artículo 46, regla 9.ª C Com.)

Sin embargo, la utilización del valor razonable **se ha limitado** a determinados instrumentos financieros:

- los activos financieros que formen parte de una cartera de negociación, se califiquen como disponibles para la venta, o sean instrumentos financieros derivados;
- los pasivos financieros que formen parte de una cartera de negociación, o sean instrumentos financieros derivados.

Para poder aplicarlo en otros elementos patrimoniales y dado que en un futuro pueden realizarse más que probables reformas a nivel comunitario, se incluye en el Artículo 38 bis. del Código de Comercio una remisión reglamentaria para poder extender su aplicación, aunque esto sólo podrá hacerse respecto de los elementos que se valoren con carácter único de acuerdo con este criterio en los Reglamentos de la Unión Europea.

¿En qué consiste?

Con carácter general, el valor razonable se calculará con referencia a **un valor de mercado fiable**. En aquellos elementos para los que no pueda determinarse un valor de mercado fiable, el valor razonable se obtendrá mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración que se determinen mediante normas reglamentarias.

Si hubiera elementos que no pudieran valorarse de manera fiable de acuerdo con este criterio, se valorarán con arreglo al **principio del precio de adquisición** o coste de producción (Artículo 38 f) C. Com.)

La regla general es, al cierre del ejercicio, imputar las variaciones de valor derivadas del criterio del valor razonable **al resultado** (cuenta de pérdidas y ganancias). Sin embargo, se prevé la imputación directa al **patrimonio neto** para determinadas transacciones y elementos patrimoniales (activos financieros disponibles para la venta y determinados instrumentos de cobertura), en una partida de **ajuste por valor razonable**.

Las variaciones acumuladas en esta partida de ajuste deberán llevarse a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se produzca la baja, deterioro, transmisión o cancelación de los correspondientes elementos.

h) El nuevo principio de prevalencia del fondo sobre la forma

(Artículo 34.2. C. Com. en su redacción por el artículo Primero del Proyecto de Ley)

Las cuentas anuales deben redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales. A tal efecto, en la contabilización de las operaciones se atenderá **a su realidad económica** y no sólo a su forma jurídica.

A la hora de contabilizar las operaciones se deben calificar éstas atendiendo a su realidad jurídica, a su fondo, independientemente de los instrumentos en que se formalicen.

C. Medidas en materia de grupos de empresas y cuentas consolidadas

El apartado Dos del artículo Primero del Proyecto de Ley da nueva redacción a la Sección Tercera del Título III del Código de Comercio (artículos 42 a 49) que regula los **aspectos fundamentales de la consolidación** de las cuentas anuales, y que posteriormente debe ser objeto de desarrollo reglamentario.

El aspecto más relevante de las modificaciones introducidas es la ampliación del concepto de **grupo de sociedades** y la consiguiente extensión de la obligación de consolidar.

Entendiendo que existe un grupo cuando varias sociedades constituyen una **unidad de decisión**, se amplía este concepto.

La nueva redacción del apartado 2 del artículo 42 del Código de Comercio, especifica dentro del concepto de grupo los supuestos de coordinación en sentido estricto, los denominados **“grupos horizontales”** en los que el vínculo entre las sociedades no es la participación en el capital y la situación de dominio de una sociedad sobre otra, sino que en ellos la unidad de decisión se pone de manifiesto por **la actuación coordinada** de varias sociedades **controladas** por una o varias personas físicas, o jurídicas, que actúan en concierto, y que no están obligadas a consolidar en virtud de la normativa mercantil.

En estos grupos en que no puede identificarse una sociedad dominante, la obligación de formular cuentas anuales e informe de gestión consolidados recae en la sociedad de mayor activo en la fecha de la primera consolidación.

En cualquier caso, la obligación de consolidar estos grupos horizontales sólo se extiende a las sociedades domiciliadas en España, sin perjuicio de la inclusión de todas las empresas dependientes de éstas, cualquiera que sea su domicilio social.

En cuanto a **las excepciones** a la obligación de consolidar, se da nueva redacción al Artículo 43 del C. Com., manteniéndose las dos excepciones establecidas actualmente. No habrá, por tanto, obligación de consolidar:

- Cuando en la fecha de cierre del ejercicio de la sociedad obligada a consolidar, el conjunto de las sociedades no sobrepase, en sus últimas cuentas anuales, dos de los límites establecidos para la formulación de **cuenta de pérdidas y ganancias abreviada**, salvo que alguna de las sociedades del grupo haya emitido valores admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
- En los supuestos de **subgrupos de sociedades**, se amplían los posibles casos de dispensa de la obligación de consolidar y se modifican los requisitos exigidos para poder acogerse a la misma.

Todas las sociedades que elaboren cuentas consolidadas en España, deberán aplicar la definición de grupo incluida en el artículo 42 del Código de Comercio, y las dispensas a la obligación de consolidar recogidas en su artículo 43.

D. Otras medidas adoptadas

a) El fondo de comercio

La reforma prevé un nuevo tratamiento contable para el fondo de comercio.

La NIIF 3, “Combinaciones de negocios”, adoptada por el Reglamento CE/2236/2004 de la Comisión, establece que el fondo de comercio **no se amortiza**, debiendo contabilizarse al cierre de cada ejercicio por su coste menos cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

En la nueva redacción que el Proyecto de Ley da al artículo 39, apartado 4, del Código de Comercio, se incorpora este mismo tratamiento, de modo que el fondo de comercio no será objeto de amortización, pero deberán practicarse **las correcciones de valor** pertinentes en caso de deterioro, teniendo las pérdidas por deterioro del fondo de comercio carácter **irreversible**.

En la memoria de las cuentas anuales se deberá informar de los ajustes realizados en el fondo de comercio desde su adquisición.

Por otra parte, se deja sin contenido el artículo 194 del TRLSA, desapareciendo la prohibición de repartir beneficios o reservas en tanto el fondo de comercio no estuviera amortizado, a menos que se contara con reservas disponibles por igual importe. Sin embargo, en el apartado Ocho del artículo Segundo del Proyecto de Ley se incorpora una **restricción al reparto de beneficios** relacionada con el fondo de comercio, estableciendo la obligación de dotar sistemáticamente una reserva indisponible por la cuantía de la potencial amortización que se habría practicado por este activo (el 5% de su importe).

b) Derogación del régimen simplificado de la contabilidad

(Disposición derogatoria única del Proyecto de Ley)

Se deroga el régimen simplificado de la contabilidad regulado en el artículo 141 y la disposición adicional duodécima y decimocuarta de la Ley 2/1995, de Sociedades de Responsabilidad Limitada y su desarrollo reglamentario, dada su escasa utilización.